

Santiago, cinco de mayo de dos mil veintidós.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**Primero:** Que en este procedimiento ordinario de cobro de pesos seguido ante el Segundo Juzgado Civil de San Miguel bajo el Rol C-6602-2018, caratulado “Dinamarca con Baeza”, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por el demandante contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel de fecha siete de enero de dos mil veintidós, que confirmó el fallo de primer grado de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, por el cual rechazó la demanda.

**EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:**

**Segundo:** Que en primer término, el recurrente esgrime la causal de nulidad formal contemplada en el artículo 768 N°1 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que la sentencia recurrida fue dictada por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto en la ley, al omitirse un trámite esencial de la vista de causa, ya que el relator no puso en conocimiento a las partes el nombre de los integrantes de la sala, a fin de que su parte pudiera ejercitar el derecho de recusar que la ley franquea, vulnerando con ello su derecho a defensa.

En segundo lugar, invoca la causal formal del artículo 768 N°3 del Código de Procedimiento Civil, al haber sido la sentencia acordada sin la concurrencia de los ministros que estuvieron presentes. Alega que, atendido que no se realizó la vista de la causa, no existe certeza para su parte que efectivamente el fallo haya sido dictado por la ministra Sra. González, la Fiscal Judicial Sra. Aránguiz y la abogada integrante Sra. Díaz.

En tercer lugar, invoca la causal del artículo 768 N°9 del Código de Procedimiento Civil, dado que en segunda instancia se omitió un trámite esencial como es la falta de fijación de la causa en tabla para su vista y fallo, conforme a los artículos 166 y siguientes del mismo código.

Por último, el recurrente esgrime la causal del artículo 768 N°5 en relación con el 170 N°4, ambos del Código de Procedimiento Civil, ya que



la sentencia de primera instancia no analizó debidamente la totalidad de las probanzas rendidas o invocadas por el actor en torno a acreditar los puntos de prueba en virtud de los fundamentos y requisitos de la acción interpuesta, en especial, los documentos acompañados en segunda instancia.

Finaliza solicitando que se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que acoja la demanda de cobro de pesos e indemnización de perjuicios o, en su caso, la demanda subsidiaria de *actio in rem verso* interpuesta, con costas.

**Tercero:** Que respecto a las tres primeras causales formales invocadas, son hechos relevantes para la resolución de este asunto los siguientes:

1.- Se dictó sentencia definitiva por el Segundo Juzgado Civil de San Miguel el 16 de agosto de 2021, por la cual se rechazó la demanda de cobro de pesos y de indemnización de perjuicios, y la demanda subsidiaria de reembolso; decisión apelada por el demandante, remitiéndose los antecedentes a la Corte de Apelaciones de San Miguel.

2.- Luego de ingresada la causa al tribunal de alzada bajo el Rol 1063-2021, ésta se acumuló al ingreso más antiguo Rol 754-2021, decretándose “en relación” el 7 de octubre de 2021.

3.- Según se aprecia del expediente virtual seguido ante el tribunal de alzada, luego de haberse decretado “autos en relación”, la causa fue colocada en tabla los días 12, 19 y 26 de noviembre de 2021, y luego el 24 y 31 de diciembre de 2021, para finalmente realizarse la vista de la causa el 7 de enero de 2022, no compareciendo las partes a realizar alegatos.

4.- Consta, además, que la abogada del demandante se hizo parte y pidió alegatos en la vista de la causa por escrito de 11 de octubre de 2021 e hizo uso de su derecho de suspender en dos oportunidades su vista, los días 12 y 19 de noviembre de 2021, en virtud del artículo 165 N°6 y N°5 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente.

5.- Las tablas de cada semana fueron publicadas en la página del Poder Judicial, como así también la información de la integración de la sala y el respectivo anuncio de su vista. En efecto, se aprecia que en la página



del Poder Judicial, se encuentra publicada la tabla de la semana desde el 3 al 7 de enero de 2022, figurando la causa Rol N°754-2021 acumulada con la Rol N°1063-2021, para el día viernes 7 de enero del año en curso, en la Quinta Sala, en el 4º lugar. Luego, en la página de la Corte de Apelaciones de San Miguel –salas.pjud.cl/monitor- se publicó en ese día la integración de la Quinta Sala y el respectivo anuncio por parte del relator.

**Cuarto:** Que de acuerdo a los artículos 68 del Código Orgánico de Tribunales y 199 del Código de Procedimiento Civil, la apelación de una sentencia definitiva es conocida por la Corte de Apelaciones previa vista de la causa.

La vista de las causas en materia civil está reglamentada en los artículos 163, 164, 165 y 166 del Código de Procedimiento Civil y, en especial, en el Título XVIII del Libro I de este mismo Código que trata de la apelación y de sus trámites. Tal trámite implica necesariamente el cumplimiento de las siguientes formalidades: notificación del decreto en “autos en relación”, colocación de la causa en tabla, relación de la misma y alegatos. Las dos primeras constituyen formalidades previas a la vista de la causa, y las dos últimas, a la vista de la causa propiamente tal. Sin cumplimiento de las formalidades previas a la causa no está en estado de verse, y jamás podrá llegarse a su vista (Mario Casarino Viterbo, Manual de Derecho Procesal Orgánico, Sexta Edición Actualizada, Tomo I, página 102).

**Quinto:** Que en mérito de lo expuesto en los motivos tercero y cuarto precedentes, se puede apreciar que los vicios alegados por la abogada recurrente no son tales, puesto que la vista de la causa ante la Corte de Apelaciones de San Miguel cumplió con cada una de las formalidades legales exigidas. En efecto, se decretó -el 7 de octubre de 2021- “autos en relación” siendo notificada dicha resolución a las partes por estado diario, luego la causa fue colocada en tabla y publicada en la página del Poder Judicial, como asimismo se hizo respecto de la integración de sala y su anuncio por parte del relator.



**Sexto:** Que sin perjuicio lo concluido precedentemente, cabe analizar cada una de las causales formales invocadas por la impugnante.

**Séptimo:** Que en cuanto a la primera causal alegada del artículo 768 N°1 del Código de Procedimiento Civil, que dice relación en haber sido la sentencia pronunciada por un tribunal integrado en contravención a lo dispuesto por la ley, ésta no se configura, por cuanto consta –como ya se dijo– en la carpeta electrónica de la causa seguida ante la Corte de Apelaciones de San Miguel y en la página web del Poder Judicial, que la integración de la Quinta Sala de dicho tribunal fue debidamente publicada con anterioridad a la vista de la causa el día 7 de enero de 2022.

En efecto, el Código Orgánico de Tribunales es el llamado a señalar las normas de integración de los tribunales colegiados. Las partes controlarán el cumplimiento de estas normas, imponiéndose de las correspondientes actas de instalación, a cargo de los presidentes de los respectivos tribunales (arts. 90 N°2 y 105 N°1 COT); y además, por el conocimiento que proporcionan verbalmente a las partes o a sus abogados el relator o el secretario cuando la integración se hace con miembros que no pertenezcan a su personal ordinario (art. 166, inc.1°, CPC). Y la oportunidad para reclamar de la integración ilegal del tribunal colegiado es, precisamente, antes de verse la causa; pues, en caso contrario, se considera que el recurso de casación en la forma, que posteriormente podría deducirse en contra de la sentencia pronunciada en tan anormales condiciones, no ha sido legalmente preparado y que debe, por consiguiente, ser declarado improcedente (Mario Casarino Viterbo, Manual de Derecho Procesal Civil, Sexta Edición Actualizada, Tomo IV, página 165).

En consecuencia, no configurándose los vicios alegados por la abogada recurrente, por haber sido oportunamente puesta en conocimiento a las partes el nombre de los integrantes de la sala, el presente recurso no podrá prosperar.

**Octavo:** Que respecto a la causal formal invocada del numeral 3 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el haber sido acordada la sentencia sin la concurrencia de los ministros que estuvieron



presentes en la vista y viceversa, de igual forma será desechada por no configurarse, atendido que se aprecia del examen de los antecedentes que el fallo de segunda instancia de fecha 7 de enero de 2022, fue dictado por los tres jueces que concurrieron a la vista de la causa, por la Ministra Sra. M. Catalina González Torres, Fiscal Judicial Sra. Tita Aránguiz Zúñiga y abogado integrante Sra. Regina Díaz Tolosa.

**Noveno:** Que referente a la causal formal del artículo 768 N°9 del Código de Procedimiento Civil, que la hace consistir en omisión de un trámite esencial como es la falta de fijación de la causa en tabla para su vista y fallo, conforme a los artículos 166 y siguientes del mismo cuerpo legal, será rechazada en mérito de lo expuesto en los considerandos tercero, cuarto y quinto precedentes, ya que se cumplió con cada uno de los trámites de la vista de la causa.

**Décimo:** Que en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 768 en relación con el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, no debe olvidarse que el defecto aparece solo cuando la sentencia carece de las consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento, no así cuando aquéllas no se ajustan a la tesis sustentada por el reclamante. Y una atenta lectura del fallo de segundo grado permite verificar que en este sí se explicitan las razones que llevaron a los juzgadores a confirmar la sentencia en alzada, enumerando en el motivo primero la prueba documental acompañada por el actor, para luego en el fundamento segundo concluir *“del análisis de ellos no permite tener por acreditada la existencia de la obligación y cláusulas invocadas por el actor en el libelo de demanda, desde que solo prueban la existencia de una investigación de naturaleza penal en contra de la demandada, relaciones de parentesco entre ésta y sus hijos, la transferencia del inmueble referido en la demanda y los movimientos bancarios del demandante sin vinculación a determinado bien raíz. En cuanto a los documentos acompañados en primera instancia y reiterados ante esta Corte, este Tribunal comparte la valoración establecida en el fallo apelado”*.



**Undécimo:** Que la sola afirmación de que una sentencia carece de fundamentos no es bastante para sobrepasar el examen de admisibilidad del recurso de casación en la forma, si en ella se constata la existencia de aquellos, pero sobre la base de un razonamiento que conduce a un resultado desfavorable para el impugnante, motivo por el cual el presente recurso de casación en la forma no podrá prosperar.

### **EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO:**

**Décimo Segundo:** Que en su reproche de nulidad sustancial el recurrente denuncia infringidas las leyes reguladoras de la prueba, en especial, los artículos 1698, 1702 del Código Civil, 318, 346 N°3, 383 y 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil. Sostiene que los jueces del fondo han liberado a la demandada de la obligación de probar la existencia de la deuda; no le otorgaron valor probatorio al contrato de arriendo acompañado por su parte por no estar firmado, a pesar que no fue objetado por la contraria; y tampoco le dieron valor de plena prueba a los dichos de los testigos presentados para acreditar la existencia de obligación, la entrega del dinero a la demandada y el daño moral sufrido por el demandante. Agrega, por último, que aun cuando no se fijó como punto de prueba la existencia de la relación sentimental entre las partes, la sentencia de primer grado exigió que se acreditara tal hecho.

Finaliza solicitando que se acoja el recurso, se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que revoque la de primera instancia, acoja la demanda de cobro de pesos e indemnización de perjuicios o, en subsidio, acoja la demanda de reembolso, con costas.

**Décimo Tercero:** Que el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, como es que el escrito en que se interpone “exprese”, es decir, explicita en qué consiste y cómo se ha producido el o los errores, siempre que estos sean “de derecho”.

**Décimo Cuarto:** Que, versando la contienda sobre un cobro de pesos derivado de un mutuo o préstamo de consumo, la exigencia consignada



en el motivo anterior obligaba a la impugnante a denunciar como infringidos aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirven para resolver la cuestión controvertida. Sin embargo, el recurrente omite extender la infracción legal a los artículos 1545, 2196 y siguientes del Código Civil, que regulan, respectivamente, los contratos en general y el contrato de mutuo en particular, teniendo en consideración que fue precisamente esta normativa la que sirvió de sustento jurídico a la demanda intentada y luego fue aplicada por los sentenciadores para resolver el litigio, y al no hacerlo genera un vacío que la Corte no puede subsanar, dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso de nulidad intentado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los artículos 781 y 782 del Código de Procedimiento Civil, se declaran **inadmisibles** los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la abogada Stephanie Márquez Granifo, en representación de la parte demandante, contra la sentencia de siete de enero de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Rol N° 4.193-2022.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema por los Ministros Sr. Guillermo Silva G., Sr. Arturo Prado P., Sr. Leopoldo Llanos S., y los Abogados Integrantes Sr. Héctor Humeres N., y Sra. Carolina Coppo D. No firman los Abogados Integrantes Sr. Humeres y Sra. Coppo, no obstante haber ambos concurrido al acuerdo del fallo, por estar ausentes. Santiago, cinco de mayo de dos mil veintidós.





En Santiago, a cinco de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

